

Al Ministro de Trabajo y al Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Señores Don **Jesús Caldera Sánchez-Capitán** y Don **Raimundo Aragón Bombín**

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (UPM) y criminólogo (UCM), con Website personal en <http://www.miguelgallardo.es> también como Administrador Único de la empresa dedicada a Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitectura denominada **Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA)**, Sociedad Limitada Unipersonal, constituida el 25 de julio de 1996, con CIF: B-81499345, Website en <http://www.cita.es> teléfonos 914743809, móvil 619776475, E-mail: miguel@cita.es y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid, como mejor proceda, **DICE**:

Que por medio del presente escrito se interpone **DENUNCIA** contra el Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Hernández León, Director de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, en Av. Juan de Herrera, 4. 28040 Madrid, Tel.: 913366000, y también como Administrador Único de la empresa **HERNANDEZ LEON ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.**, con CIF: B-84657329 y domicilio social en C/ Génova, 19. 28004 Madrid

La presente **DENUNCIA** se fundamenta en los siguientes **HECHOS**:

PRIMERO.- La legitimidad formal de la empresa denunciante se comprueba fácilmente por tener exactamente el mismo CNAE que la denunciada (*7420 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico*), afectada por el presunto uso de recursos materiales y humanos de un centro público en una empresa privada (software, proyectos, datos y cualquier otro tipo de propiedad intelectual, colaboraciones de alumnos, profesores, investigadores y cualquier otro tipo de sujeto inspeccionable laboralmente) y yo soy claramente **interesado según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 30/1992.**

SEGUNDO.- La irregularidad es notoria al ser descaradamente incompatible la dirección de una Escuela Superior de Arquitectura de una universidad pública con las actividades que realiza, con evidente ánimo de lucro, la empresa denunciada (LA INTERMEDIACION Y COORDINACION EN LOS CAMPOS DE LA **ARQUITECTURA**), y es muy relevante porque según se ha publicado en numerosas noticias de varios periódicos, el funcionario denunciado es responsable, entre otros, del controvertido proyecto de remodelación del Eje Prado-Recoletos, y es inconcebible que pueda hacerse frente a responsabilidad semejante desde un cargo directivo en una universidad pública sin utilizar en su empresa recursos materiales y humanos que no están al alcance de mi empresa, en gran desventaja respecto a la empresa denunciada, como **puede y debe comprobarse requiriendo al denunciado y a su empresa** toda la información aplicando inmediatamente las medidas expresamente contempladas por la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, siguientes:

1. **Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo.** Si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia al empresario o a su representante o persona inspeccionada, **a menos que consideren que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.**
2. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los trabajadores, sus representantes y por los peritos y técnicos de la empresa o habilitados oficialmente que estimen necesario para el mejor desarrollo de la función inspectora.
3. Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para:
 - 3.1. **Requerir información**, sólo o ante testigos, al empresario o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a **exigir la identificación**, o **razón de su presencia**, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.

3.2. Exigir la comparecencia del empresario o de sus representantes y encargados, de los trabajadores, de los perceptores o solicitantes de prestaciones sociales y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector actuante.

3.3. Examinar en el centro de trabajo la documentación y los libros de la empresa con trascendencia en la verificación del cumplimiento de la legislación del orden social, tales como: libros, registros, incluidos los **programas informáticos** y archivos en soporte magnético, declaraciones oficiales y contabilidad; documentos de inscripción, afiliación, alta, baja, justificantes del abono de cuotas o prestaciones de Seguridad Social; documentos justificativos de retribuciones; documentos exigidos en la normativa de prevención de riesgos laborales y cualesquiera otros relacionados con las materias sujetas a inspección. El inspector está facultado para requerir la presentación de dicha documentación en las oficinas públicas correspondientes.

3.4. Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y **planos**, siempre que se notifique al empresario o a su representante y obtener copias y extractos de los documentos a que se refiere el apartado 3.3 del presente artículo.

4. Adoptar, en cualquier momento del desarrollo de sus actuaciones, las medidas cautelares que estimen oportunas y sean proporcionadas al fin que se persiga, para **impedir la destrucción, desaparición o alteración de la documentación** mencionada en el apartado anterior, siempre que no cause perjuicio de difícil o imposible reparación a los sujetos responsables o implique violación de derechos.

TERCERO.- La utilización de recursos públicos, incluyendo muy especialmente las colaboraciones de funcionarios o de personal contratado por la Universidad Politécnica de Madrid, así como becarios, o estudiantes en prácticas por quienes les califican académicamente, no solamente es un hecho repugnantemente inmoral que deteriora y envilece el mercado de trabajo, sino que incumple entre otras normativas la **Ley 32/2006**, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, la **Ley 62/2003**, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, el **Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores**, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el resto de la legislación social. Como criminólogo que soy, percibo con claridad que lo más preocupante es que las irregularidades empresariales y laborales las cometa, nada menos, que el Director de una Escuela Técnica Superior de Arquitectura, mientras lo es, en la empresa denunciada como Administrador Único, porque siendo la Construcción una de las actividades económicas más importantes de nuestra economía, es también la que más irregularidades tolera, algunas con resultado de muerte en accidente laboral, y la pregunta que quisiera que alguien le hiciera directamente, y en público, al Ministro, es si lo que hace el Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Hernández León, Director de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, como Administrador Único de la empresa HERNANDEZ LEON ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L., es lo que deben aprender y practicar los futuros arquitectos en cargos públicos, lucrándose con actividades privadas que, repito, deterioran y envilecen el mercado de trabajo, como espero y deseo que la inspección constate pronto.

Por lo expuesto, SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, se admita a trámite y se tenga por interpuesta **DENUNCIA contra HERNANDEZ LEON ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.**, con CIF: B-84657329 y domicilio social en C/ Génova, 19. 28004 Madrid ante el **Ministro de Trabajo y el Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social**, y en su virtud, se incoe expediente para requerir e inspeccionar según faculta el artículo 5 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tramitándose el mismo conforme esté legalmente establecido, y **tenga por interesado a este empresario e ingeniero en el procedimiento**, dándosele vista de las sucesivas actuaciones, y en todo caso, a la mayor brevedad, el número de registro de este documento que para mayor facilidad **YA ESTÁ PUBLICADO** en <http://www.miguelgallardo.es/ministrodetrabajo.pdf>

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, solicitando pronto acuse, en Madrid, a 7 de enero de 2008.

Fdo.: **Miguel Ángel Gallardo Ortiz**, con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (UPM) y criminólogo (UCM), con Website personal en <http://www.miguelgallardo.es> también como Administrador Único de la empresa dedicada a Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitectura denominada **Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA)**, Sociedad Limitada Unipersonal, constituida el 25 de julio de 1996, con CIF: B-81499345, Website en <http://www.cita.es> teléfonos 914743809, móvil 619776475, E-mail: miguel@cita.es y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid

Al Ministro de Trabajo y al Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Señores Don **Jesús Caldera Sánchez-Capitán** y Don **Raimundo Aragón Bombín**